



Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

*Expte. N°: 43845/2007*

*Autos: “SIEGEMUND GERARDO REINALDO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”*

*Sentencia Interlocutoria*

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

VISTO Y CONSIDERANDO:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la resolución de fecha 28 de marzo de 2023 que aprueba en cuanto ha lugar por derecho la liquidación ampliatoria practicada por la actora, quedando determinado el haber a julio de 2022 en \$ 396.610,02 y las retroactividades en la suma de \$ 9.219.191,68.

La ejecutada cuestiona la liquidación aprobada en autos, el cálculo de intereses, la liberación de topes legales y solicita la aplicación del precedente “Villanustre”. Critica la imposición de costas a su cargo y apela los honorarios regulados por elevados. Por su lado, la representación letrada de la parte actora considera reducidos sus emolumentos solicitando sean calculados en el máximo legal.

En primer lugar, corresponde rechazar los agravios vertidos en relación a la liquidación, en tanto los nuevos cálculos son una mera actualización de lo aprobado en la sentencia de fecha 3 de septiembre de 2019 (liquidación de fs 349/360).

En referencia a los intereses, con las constancias de autos, los fundamentos esgrimidos no logran conmover lo decidido en la instancia de grado, ya que la apelante se limita a disentir con el criterio seguido por el juzgador sin llegar a cuestionar, con argumentos científicos y objetivos lo estipulado.

La doctrina ya ha señalado que la crítica concreta y razonada prevista por el art.265 del C.P.C.C.N. no se configura con una mera discrepancia; debe implicar el estudio de los razonamientos del juez, demostrando a la Cámara las equivocaciones, deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas ya que la expresión de agravios debe contener un análisis crítico y razonado de la sentencia que la motiva, señalando y demostrando punto por punto, los errores en que se ha incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho (conf. Fenochietto y Arazi “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” Tomo I pág.837, edit. Astrea año 1987). Por ello, se desestima la queja.

Sobre las costas, no corresponde hacer lugar al agravio esgrimido de conformidad con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

del fallo” Rueda Orlinda c/ ANSeS s/ ejecución previsional”, sentencia del 15 de abril de 2004, ratificado en autos “Becerra Isolina C/ANSeS s/Ejecución Previsional “. B. 668 XXXVII, sentencia del 15/06/04 y “Patiño Raúl Osvaldo” sentencia del 27/05/09.

En relación a los honorarios, apelados por ambas partes, el art. 41 de la ley 27.423 expresamente dispone: “En el procedimiento de ejecución de sentencias recaídas en procesos de conocimiento, las regulaciones de honorarios se practicarán aplicando la mitad de la escala del artículo 21. No habiendo excepciones, los honorarios se reducirán en un diez por ciento (10%) del que correspondiere regular. Las actuaciones posteriores a la ejecución propiamente dicha se regularán en un cuarenta por ciento (40 %) de la escala del citado artículo.”.

Contemplándose la etapa en que se encuentra el proceso, debe estarse a los fines regulatorios, a los términos de la última parte de la norma precedentemente citada.

En consecuencia, a fin de verificar el mínimo regulatorio dispuesto en el art. 21 de la ley arancelaria, como primer paso, debe determinarse la **Base regulatoria en UMA**, es decir, el monto aprobado por la suma de \$ 9.219.191,68 (liquidación incorporada digitalmente el 31/8/22) dividido el valor de la UMA vigente a la fecha de cierre de liquidación 31/7/22, en el caso \$ 9.811 -conforme Acordada C.S.J.N. 25/22-, ello arroja la cantidad de 939,67 UMA (base regulatoria en UMA).

Como segundo paso, se identifica la escala a la que pertenece, la séptima y su escala inmediata anterior que es la sexta. Con la escala anterior se calcula el **piso mínimo** por debajo del cual no se puede regular; se toma el porcentaje máximo sobre el valor máximo de UMA (es decir de la escala 6°, porcentaje máximo 17 % de 750 UMA máxima, arroja un total de 127,50 UMA). Así, el piso mínimo es 127,50 UMA.

El paso siguiente es el cálculo del **excedente**: se utiliza nuestra base regulatoria de UMA 939,67, menos el máximo de UMA de la escala inmediata anterior que dijimos era 750 UMA, ello arroja la cantidad de 189,67 UMA ( $939,67 - 750 = 189,67$ ). Sobre este excedente se aplican los porcentajes máximos y mínimos de la escala correspondiente al caso (escala 7°: mínimo 12 % y máximo 15%), es decir: excedente  $189,67 \times 12 \% = 22,76$  UMA (mínimo) y excedente  $189,67 \times 15 \% = 28,45$  UMA (máximo).

De acuerdo a lo dispuesto en la escala del art. 21 de la ley 27.423, al piso mínimo de 127,50 UMA se le suma el excedente en su porcentaje máximo o en su porcentaje mínimo ( $127,50 + 22,76 = 150,26$  UMA MÍNIMO, o  $127,50 + 28,45 = 155,95$  UMA MÁXIMO).

Dentro de esos máximos y mínimos (150,26 UMA y 155,95 UMA) se regulará el honorario de acuerdo al caso concreto, que aquí por tratarse de actuaciones posteriores a la ejecución propiamente dicha, debe aplicarse el 40 % de la escala del art. 21 (conf. art.41





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

última parte de la ley 27.423), es decir, el rango del mínimo legal se encuentra dentro del mínimo 60,10 UMA y el máximo 62,38 UMA.

De este modo, en atención al monto del proceso, el mérito e importancia de las tareas realizadas en la segunda etapa ejecutiva, tomándose la base regulatoria de autos y el mínimo legal precedentemente señalado, corresponde elevar los emolumentos pertenecientes a la Dra. María Cecilia Licari a la suma de \$ 1.524.917,30 equivalente a la cantidad de 60,10 UMA, de conformidad con los arts.16, 21, 24, 41 última parte y 51 de la ley 27.423, Resolución CSJN 2722/23, con más el IVA en caso de corresponder.

Por lo expuesto, el Tribunal **RESUELVE**: 1º) Elevar los honorarios correspondientes a la Dra. María Cecilia Licari T° 54 F° 790, a la suma de \$ 1.524.917,30 equivalente a la cantidad de 60,10 UMA, con más el IVA en caso de corresponder (conf. arts.16, 21, 24, 41 última parte y 51 de la ley 27.423, Resolución CSJN 2722/23). 2º) Confirmar la resolución en lo demás que decide y ha sido materia de agravios por la ANSES; 3º) Costas de Alzada a la demandada vencida (art.68 CPCCN); 4º) Regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora por su actuación en la Alzada en el 30 % de la suma fijada por su labor en primera instancia -conf. art. 30 de la ley 27.423-, con más el IVA en caso de corresponder (cfr. Compañía General de Combustible SA s/Recurso de Apelación” sent. del 16/06/93) y 5º) Devolver las actuaciones al juzgado de origen a sus efectos.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

KPB

